

Apuntes del Observatorio de la Conflictividad Social[¶]

Alba Yutzil García Ríos^{¶¶}

En el Observatorio de la Conflictividad Social de “Servicios para la Paz A.C.” (Serapaz) hemos construido varias hipótesis en torno a la conflictividad social en México:

- La primera es que hay una tendencia a la invisibilización de los conflictos sociales por parte del Estado, así como la falta de reconocimiento de la legitimidad de sus actores.
- La segunda es que esta invisibilización y falta de reconocimiento provoca un escalamiento social de la conflictividad en la que se generan formas de confrontación más radicales.
- La tercera es que a partir del cierre de canales de diálogo y el escalamiento en la confrontación se genera una tendencia de respuesta por parte del Estado en torno a la represión, judicialización y desgaste de los movimientos.

[¶] Versión estenográfica editada.

^{¶¶} Estudiante de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Colaboradora en investigaciones periódicas del Observatorio de la Conflictividad Social de “Servicios para la Paz A.C.” (Serapaz).

La invisibilización por parte del Estado repercute en el hecho de que los movimientos sociales no son oídos ni vistos por el Estado y éste ignora que existen, o hace como si no existieran. Hay, al menos, dos tipos de invisibilización: la que proviene por parte del Estado y la de los medios de comunicación.

El espectro de conflictos sociales que existen en el país es mucho más amplio que los casos emblemáticos. Si bien los casos emblemáticos son muy importantes y simbólicamente tienen gran importancia, existen muchos conflictos sociales en todo el país. En todos los ámbitos, tanto nacional como local, hemos registrado muchísimos conflictos sociales a lo largo de este año. De los casos de conflictividad registrados en el primer semestre de 2008, 76 por ciento son contra el Estado; sin embargo, en aproximadamente 64 por ciento de estos conflictos el Estado no interviene de ninguna forma, es decir, los ignora por completo, muchos conflictos son invisibilizados algún tiempo pero quedan latentes, tal es el caso del conflicto de la presa La Parota en Guerrero, San Salvador Atenco en el Estado de México y Oaxaca entre muchos otros.

Otra forma en la que se hace notoria la invisibilización por parte del gobierno hacia movimientos, organizaciones y actores sociales en general es la falta de canales de interlocución entre éste y la sociedad civil, así como la falta de eficacia de los existentes. En contraste, se mantiene la vigencia de un sistema basado en el corporativismo, el clientelismo político y la represión como ejes fundamentales de la relación con la sociedad civil. Vemos que los principales actores que se están confrontando con el Estado son las comunidades: el colectivo urbano, seguido del colectivo rural.

Los actores que cuentan con una estructura orgánica más sólida como las organizaciones laborales o los sindicatos son más fácilmente reconocidos como interlocutores válidos por el Estado y la sociedad en general. Es más difícil invisibilizarlos en comparación con actores inorgánicos que por su dinámica más espontánea, efímera y perecedera pueden ser más fácilmente ignorados o dispersados por diferentes métodos.

Muchos de los conflictos que tenemos registrados en este año son conflictos que están desarticulados: conflictos de vecinos, de habitantes de alguna región que están reclamando necesidades básicas, estos no están organizados y el Estado los hace a un lado, los invisibiliza.

Los conflictos laborales resultan los más visibles debido a su estructura y a la capacidad de organización y movilización social que tienen los trabajadores; las principales demandas por las que los actores se han movilizado este año responde a la defensa de los derechos laborales, así como por cuestiones económicas principalmente.

Tenemos movilizaciones contra la Alianza por la Calidad Educativa como un ejemplo de movilizaciones organizadas que están luchando por derechos laborales. La invisibilización y la falta de reconocimiento provocan un escalamiento social de la conflictividad en la que se generan formas más radicales de confrontación.

Nosotros planteamos que las marchas y la denuncia pública son los métodos y las estrategias de confrontación más usados; los actores buscan el bloqueo vial para llamar la atención del Estado.

El cierre de canales de diálogo se ve reflejado en que solamente 14 por ciento de los conflictos registrados en 2008 entran en un canal de negociación y 4.6 por ciento se quedan en procesos de mediación, sin que esto signifique que se resuelvan por este medio los conflictos. Está el caso paradigmático del Ejército Popular Revolucionario (EPR) como un ejemplo del escalamiento del conflicto social y la falta de canales de negociación.

La represión y judicialización de la protesta social apunta principalmente al desgaste de los movimientos sociales y es, en este entorno del escalamiento de la confrontación, una respuesta por parte del Estado.

La represión de la protesta social es en lo que tenemos que poner más atención en este momento. La respuesta del Estado a la radicalización de formas de confrontación a la que se ven empujados los movimientos sociales es la represión.

El Estado emplea diferentes tipos de represión dependiendo del costo político que esté dispuesto a pagar en función de la efectividad de los fines de desmovilización que se plantea.

Nosotros también planteamos que hay dos tipos de represión: la selectiva y la masiva, y en lo que va de este año ha habido más casos de represión selectiva en el país. Esto es muy preocupante y está muy ligado a los presos políticos y a los desaparecidos; tiene que ver con la manera en que se presenta el actor y sus formas de manifestarse. Como un ejemplo tenemos el caso en Zimapán, Hidalgo, en donde se ha dado una represión masiva y observamos que se ha mantenido

esta confrontación por parte de los actores sociales y el Estado. La represión y el hostigamiento en el caso de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) es un ejemplo de represión selectiva en el estado de Guerrero; se observa que hay líderes y actores sociales que al Estado le interesa reprimir y encarcelar. Dentro de la represión selectiva se inserta la desaparición forzada.

Las represiones se dan mayoritariamente en el D.F., el Estado de México, Veracruz, Morelos y Oaxaca; sin embargo, los índices que obtuvimos muestran que el estado más represivo es Morelos, seguido por Baja California, Sinaloa, Veracruz, Coahuila y Tabasco.

Las estrategias de confrontación con mayor índice de represión son la confrontación física, el bloqueo y la retención física. Estas estrategias están señaladas como estrategias no legales; en cambio la denuncia pública, la marcha mitin, la denuncia legal si se consideran una estrategia de confrontación legal. Sin embargo, en algunos casos también se da la represión en la denuncia pública y en la marcha mitin. Durante 2008 los actores con mayor índice de represión han sido los periodistas y los comerciantes. Por otro lado el sector agropecuario, dado que se moviliza más, tiene un alto número de casos de represión.

En lo que corresponde a la judicialización de la protesta social, el Estado introduce a los movimientos y actores sociales en una dinámica de confrontación legal en la que estos últimos suelen quedar en profunda desventaja y se acotan sus posibilidades de éxito, con ello se empuja a un proceso de desgaste de los movimientos sociales.

Se judicializa antes y después de la represión, esta es una forma de administrar un conflicto, con ello se busca que el conflicto no escale.

Tenemos como casos emblemáticos de judicialización de la protesta social, los casos de los mineros en Pasta de Conchos y Cananea, el caso de Oaxaca, Atenco y las radios comunitarias. En el caso de los mineros de Cananea no sólo ha habido un proceso de judicialización, sino que también se ha dado una represión masiva.

Otro de los temas que hemos resaltado en el Observatorio es la cuestión de los presos políticos: hacemos referencia a los presos políticos de Atenco, a Ignacio del Valle como un caso emblemático; sin embargo, no dejamos de lado los 10 casos de los compañeros presos por este mismo caso. Estamos pendientes de los presos políticos

en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, así como de los presos de la OPIM. Estos actos de represión y encarcelamiento se están generalizando en el nivel nacional.

Los estados con mayor presencia de conflictos son aquellos en que existe un nivel más amplio de marginación y donde hay presencia de recursos estratégicos; son estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz e Hidalgo que, a la par, si lo vemos, son estados con mayor índice de marginación.

Los medios masivos de comunicación han jugado un papel cada vez más importante en la legitimación y deslegitimación de los conflictos sociales y en la determinación de la forma de afrontarlos; es decir, que cada vez los medios masivos de comunicación están buscando ejercer un juego y un control, no sólo sobre el Estado, sino también sobre los actores sociales. El espacio de negociación es utilizado por el Estado para mediatizar los conflictos estratégicos, y por los movimientos como un recurso táctico para ganar fuerza, por ello el margen de negociación se está haciendo frágil y estrecho. Como ya lo habíamos mencionado antes el Estado no está entrando en procesos de negociación con los actores y las mesas de diálogo están tendiendo a convertirse en mesas tácticas, no de fondo ni estratégicas o en espacios para resolver transitoriamente conflictos laborales, gremiales o muy locales.

Existe todo un proceso de confrontación por parte del gobierno contra los movimientos sociales que apuesta al desgaste paulatino de estos últimos: inicia con la invisibilización y termina con la represión o judicialización de los conflictos. Dicho proceso está basado en la misma estructura de relación sociedad civil-gobierno, mantenida históricamente con partidos de Estado y mecanismos clientelares que lo enmarca en una política de Estado más allá del partido que gobierne en turno.

Nosotros consideramos que ésta no es una situación local, sino nacional y que principalmente está afectando a los conflictos y a los movimientos sociales en términos de represión, mayor número de presos políticos y de desaparecidos.